La Responsabilidad Social y Ambiental como herramienta para contribuir al
sector minero en Antioquia

Yicenia Marcela Montoya Caro

Asesor: Mayda Soraya Marín Galeano

Universidad Católica Luis Amigó
Especialización en derecho empresarial
Medellín

2017

Resumen

El presente artículo es una inicial producción de una revisión bibliográfica sobre: conceptos como la responsabilidad social y ambiental enfocados a la Minería en Antioquia - Colombia, en este texto se presenta la normatividad existente a lo largo de la de la dinámica económica extractiva que viene asumiendo Colombia y que se lo ha planteado en su Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde se busca impulsar el sector minero energético como motor de desarrollo del país. En el primer capítulo se hace una reflexión sobre la responsabilidad social y ambiental y el estado de concientización sobre el impacto que se está ejerciendo sobre el medio ambiente y en el segundo capítulo está la reglamentación que busca garantizar el beneficio económico, de esta forma se manifiesta una serie de conflictos a nivel cultural, ambiental, de autonomía, de soberanía y de la vida misma en los territorios, donde se generan estos proyectos de extracción de recursos naturales.

Abstrac

The present article is an initial production of a bibliographical review on concepts such as social and environmental responsibility focused on Mining in Antioquia, Colombia, this text presents the normative existing along the one of the extractive economic dynamics that has been assuming Colombia and that has been raised in its National Development Plan 2014-2018, which seeks to boost the energy mining sector as the country's development engine. The first chapter reflects on social and environmental responsibility and the state of awareness about the impact that is being exerted on the environment and in the second chapter is the regulation that seeks to guarantee the economic benefit, in this way manifests itself A series of conflicts in terms of cultural, environmental, autonomy, sovereignty and life itself in the territories, where these projects of natural resource extraction are generated.

Palabras clave

Responsabilidad social, responsabilidad ambiental, fines del estado, recursos naturales, legislación, participación, defensa del territorio.

Key word

Social responsibility, environmental responsibility, state goals, natural resources, legislation, participation, territorial defense.

Contenido

Introducción	4
Justificación	5
1. Acercamiento conceptual a la responsabilidad social y ambiental.	6
1.1 ¿Qué es responsabilidad social?.....	6
1.2 ¿Qué es responsabilidad ambiental?	8
2. Regulación nacional y departamental relacionada con la explotación de los recursos naturales en Antioquia	9
2.1 Los fines del estado	9
2.2 Sustracción cronología de la legislación minera en Colombia:	10
2.3 Localización de explotaciones mineras en Antioquia	13
Conclusiones:.....	15
Bibliografía	16

Introducción

La responsabilidad social y ambiental utilizada como herramienta durante varios años, planteada en diferentes reflexiones y documentos, tiene dentro de sus fundamentos una serie de dificultades en su precaución, prevención y participación. Las empresas antioqueñas están experimentando estos problemas y realizando su propia valoración en conjunto con la maximización de los recursos, la satisfacción obtenida en el trabajo, la seguridad personal, la protección y utilización de los recursos naturales e incluso las relaciones con otros países (Lecturas sobre derecho del medio ambiente, 2004).

Se tratará de definir entonces, teniendo como medio, las fuentes de información, cuál es la responsabilidad social y ambiental que tienen las empresas frente a la explotación de los recursos naturales en Antioquia, y cómo según la experiencia se preserva el equilibrio entre el medio ambiente y el individuo. En la constitución política de Colombia 1991 se contienen diferentes artículos donde se hace alusión a la protección de los recursos naturales, cada vez más explotados para establecer competencias, alcances, falencias y/o favorabilidades para emprender proyectos. Sin embargo, a pesar de la múltiple información, estos artículos contienen vacíos en su exigibilidad (Duque, Cardona, & Rendón, 2013). En concordancia la participación democrática, también cuenta en las decisiones pero en la práctica, los entes territoriales o las administraciones que están de cara a la actividad de la explotación de los recursos naturales, se ve limitada, por órdenes de una administración centralizada. (Vargas & Carmen, 2003).

Por tal razón, usando la indagación del concepto y algunas prácticas frente al tratamiento de los recursos naturales, se intentará llegar al conflicto o dilema humano sobre la elección de la responsabilidad social y ambiental. Así mismo, desde un punto de vista comportamental o cultura ciudadana, existen fenómenos como la indiferencia, la individualidad y la desconfianza en la aplicación de correctivos de justicia que pueden ser contrarrestados con otras prácticas donde se le ha dado solución a este tipo de deficiencias dando continuidad a su desarrollo e innovación.

Es de analizar que las practicas frente a la explotación de los recursos naturales en Antioquia, aparte de los permisos, concesiones y regulaciones, siempre se irá incorporando la ética y la teoría de los stakeholders (Milán, Rosa, & Villaroel, 2009). De igual forma, se especifican los casos de negocio y desarrollo sustentable, buscando el significado global de la responsabilidad social y su importancia tanto para los negocios como para la sociedad.

Como complemento al desarrollo del anterior contenido, se deja expuesto la siguiente reflexión de Juan Fernando Palacio Roldán, bajo el marco de Platón, en la obra de Saramago (Saavedra, y otros, 2010) “La ciudad te seguirá, fundarás otra, con los mismos vicios, a donde quiera que vayas”, esta reflexión es entendida como la salida o la experimentación de un estado de confort a un ambiente cambiante y agitado, donde las sombras se posan, hasta que la madurez y el método toman fuerza, transforman el entorno y se tienen nuevas herramientas, nuevo conocimiento para enfrentar el mundo cambiante, es lo que se percibirá más adelante como claridad y se repetirá de nuevo el ciclo, por lo tanto lo que quiere

exaltar la obra es que aparte del conocimiento, la ética acompaña al ser humano contemporáneo en la toma de decisiones.

Es así como para el presente artículo se planteó como objetivo general, identificar la responsabilidad social y ambiental frente a la explotación de los recursos naturales en Antioquia, y como específicos, primero, conceptualizar la responsabilidad social y ambiental, y segundo, describir como ha sido la explotación de los recursos naturales en Antioquia y las normas que lo regulan.

Para la metodología se realizó una amplia bibliografía, los conceptos, perspectivas, legislación, reflexiones sobre la responsabilidad social y ambiental, haciendo una aproximación sobre el estado de esta herramienta en las empresas antioqueñas. El enfoque que se le dará a este trabajo de investigación será cualitativo, gracias a los contenidos presentados por diferentes autores, que serán debidamente mencionados en el desarrollo de este trabajo, además se podrá exponer e identificar, de forma general, la incidencia de este tema en las empresas, en particular en los sectores de explotación de recursos naturales en Antioquia.

En este artículo se dará a conocer algunos conceptos sobre responsabilidad social y ambiental, desde autores como Bowen, Drucker y Jonas, donde nos hacen un recuento sobre los elementos utilizados para desarrollar el concepto, como su aplicabilidad al medio empresarial y que a su vez se extiende a la cotidianidad de cada uno de los individuos en una sociedad. Y así mismo revisar en la constitución política de Colombia y en su legislación actual como se viene realizando esta práctica en virtud de la explotación de recursos naturales en el área de Antioquia.

Justificación

El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad antioqueña con respecto a la práctica de la responsabilidad social y ambiental. Los antecedentes descritos bajo la influencia de diferentes autores y su literatura en torno al compromiso con el medio ambiente.

Los hombres actuales enfrentan un panorama diverso, competitivo y demandante. Esto a simple vista es alentado por la misma sociedad, donde se le agregan evaluaciones de un mundo globalizado que abre la puerta a examinar y debatir estrategias que contribuyan a iniciativas conjuntas para mejorar un derecho colectivo como lo es un ambiente sano, con la ayuda de las prácticas de responsabilidad social y ambiental.

Según (Murillo, Garcés, & Torres, 2004), los agentes externos ejercen una importante presión, básicamente a partir de los clientes, la legislación y las empresas del sector, como también lo son los proveedores, las entidades financieras y aseguradoras, los medios de comunicación y grupos ecologistas y los ciudadanos o comunidades próximas. Estos stakeholders canalizan expectativas que exceden el mero cumplimiento de la normativa medioambiental y la presión generalizada va en incremento por los impactos ambientales sin ningún tipo de barrera que se vuelve en un asunto

universal. Situación que está alterando el hábitat de los seres vivos y el bienestar humano. (Gómez & Juan, 2012). Desde otra perspectiva, el diálogo es el reconocimiento del otro en las empresas lo que garantiza la responsabilidad social y ambiental, dichos actos no sólo legitiman a la empresa, sino que adicionalmente hace que su actividad sea más sustentable. Las empresas se encargan de instrumentalizar, sus planes de trabajo bajo una racionalidad que le permita alcanzar sus objetivos, a través de los recursos físicos, financieros y humanos. Los planes de trabajo dados a conocer y la comprensión sobre la problemática ambiental, serán insumo para diseñar o reformar una cultura organizacional, que vincule la responsabilidad social y ambiental en un mundo moderno.

El aumento de la extracción de recursos naturales en Colombia y precisamente en Antioquia, está impulsando el crecimiento económico, sin embargo, es una de las causas principales de la contaminación del suelo y el agua, deteriorando el equilibrio natural en los ecosistemas y presentándose conflictos de salud, sociales y ambientales; este tipo de cambios es normal que las sociedades lo experimenten, así como el factor transformador, materializado en los planes de gestión, que tienen las empresas, para darle vía favorable a sus proyectos. Con este trabajo se tratará de recopilar al máximo la información, sobre responsabilidad social y ambiental, para contribuir a una amplia visión y fundamentación sobre el tema.

Dado su impacto, los costos sin implementar superan, en gran margen, una actuación en materia ambiental que permite visualizar su importancia. La responsabilidad social y ambiental es un instrumento que las empresas gradualmente han ido incorporando a su objeto social, conformado por obligaciones y compromisos legales y éticos que impactan en el ámbito social, laboral y medioambiental.

Lo que se pretende con este trabajo es mostrar el desarrollo de la responsabilidad social y ambiental, profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de adaptación, además de ofrecer una mirada integral sobre el daño ambiental producido por el crecimiento económico no sustentable, ayudando a la concientización de la población local antioqueña.

1. Acercamiento conceptual a la responsabilidad social y ambiental.

1.1 ¿Qué es responsabilidad social?

Desde la primera parte del siglo veinte, su estudio moderno tuvo como pionero a Howard Rothmann Bowen quien, en 1953 en su libro “Social Responsibilities of the businessman” (Bowen, 1953) sugirió que las empresas deberían tomar en cuenta las consecuencias sociales de sus decisiones, destaca una serie de propuestas para aumentar la capacidad de gestión de los sectores empresariales y los intereses sociales, que a pesar de ser unas propuestas de medio siglo atrás hoy cobran realidad y vigencia. Algunas de sus propuestas fueron: (Comunicación de Responsabilidad & Sustentabilidad Empresaria, 2015).

a) Cambiar los consejos de administración, permitiendo la participación de otros sectores interesados además de los accionistas.

b) Una mayor representación del punto de vista social en la gestión, teniendo en cuenta que esta intervención es mucho más eficaz en las decisiones de una empresa.

c) La auditoría social, agentes especializados y externos que evalúan todas las dinámicas de la empresa tales como precios, salarios, investigación, desarrollo, relaciones públicas, con la comunidad entre otras.

d) Desarrollo de prácticas acogidas por otras empresas, para comenzar a formar los nuevos códigos y ajustarlos a la empresa específica dignas de imitar y que sean un aspecto positivo para el desarrollo de la actividad empresarial. (Comunicación de Responsabilidad & Sustentabilidad Empresarial, 2015)

A continuación se realiza un recuento histórico por el cual ha pasado el concepto de la responsabilidad social empresarial:

La época empresarial 1880, se caracterizó por una economía desenfrenada en la cual se utilizó el término de *laissez-faire* (“dejar hacer, dejar pasar”).

La gran depresión 1929, mucha gente culpó del fracaso de los negocios y de los bancos a la avaricia de algunos empresarios, que estaban pensando más en sus propios intereses, este panorama llevó al estado a generar nuevas leyes para proteger e incrementar el bienestar general de la sociedad.

Época del activismo social 1965, en esta época aparecen los movimientos sociales, cambios en las exigencias de los consumidores, aparición de la responsabilidad social en Latinoamérica, el modelo social empresarial y el balance social. (Canessa & Garcia, 2005).

La conciencia social contemporánea o época actual, se caracteriza por la mayor conciencia de la globalización económica y por campañas intensas de los movimientos ambientalistas y ecológicos, además, de un mayor desarrollo en lo referente a la responsabilidad social empresarial, aparecen una serie de herramientas para hacer la medición de la responsabilidad social, como por ejemplo la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad GRI, que proviene de una organización de múltiples grupos de interés (stakeholders), sin ánimo de lucro y que ha sido apoyada por las Naciones Unidas, por la Comunidad Europea, el Banco Mundial, entre otros y que establecen unos contenidos mínimos que debe ir recopilando la empresa para poder generar sus informes de sostenibilidad, en primer lugar según las recomendaciones del GRI, se encuentra: 1) Definir la visión de la empresa con respecto al desarrollo sostenible, 2) Enfoque de la dirección: información sobre el estilo de gestión a través del cual una organización aborda aspectos específicos y describe el contexto que permite comprender su comportamiento en un área concreta, 3) Indicadores de desempeño: indicadores que permiten disponer de información comparable respecto al desempeño económico, ambiental y social de la organización. (Ariza, 2012).

En 1996, Peter Drucker complementa este punto de vista afirmando que cada organización debe asumir la plena responsabilidad por el efecto que tenga en sus empleados, en el entorno, en los clientes y en cualquier persona o cosa que toque. Eso es responsabilidad social. (Canessa & Garcia, 2005).

La empresa, para ser una institución legitimada socialmente, ha de dar respuesta a las demandas que la sociedad le plantea desde los valores y las pautas de comportamiento ya que según la evolución histórica son continuas y cambiantes, por tal razón en la experiencia de las empresas se va despertando

una característica de obligación por convicción, que significa asumir compromisos y acciones para construir una sociedad mejor en los diferentes planos, inicialmente de manera interna: trabajadores, accionistas, proveedores y luego hasta un alcance externo como por ejemplo la comunidad. (Canessa & García, 2005).

1.2 ¿Qué es responsabilidad ambiental?

Las empresas se asemeja a los sistemas complejos vivos, puesto que el instinto de supervivencia está presente en toda forma de vida por simple que sea, de esta forma aprenden en el transcurso de sus operaciones a diferenciarse del resto de organizaciones gracias a la cohesión e identidad, prácticas culturales sustentables y el equilibrio financiero, que a su vez se traducen en prácticas percibidas favorablemente. Es necesario la participación de las empresas en la gestión ambiental, ya que establece el nivel de responsabilidad ambiental a la que se encuentra sujeta cada una de ellas, la cual disminuirá o aumentará dependiendo del contexto y las condiciones bajo las que se realice la actividad empresarial, se determina así un compromiso que la empresa lleva a cabo, no por obligación o exigencia legal, sino por ética, imagen constitucional o buen gobierno corporativo, entre otras razones. (Arias, 2010).

La propuesta de Hans Jonas, da inicio cuando el hombre hizo abuso de su dominio sobre la naturaleza, poniéndolo en el contexto con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, donde avanzó hacia un nuevo pensamiento de tipo cuestionamiento, que consiste en evidenciar el peligro que significa para nosotros mismos el poder del hombre sobre la naturaleza. Hasta entonces la ética estaba restringida al ámbito de la relación con el prójimo, ahora con la moderna intervención tecnológica cambió drásticamente y el ser humano se debate en la realidad subjetiva y objetiva, apelando a la sensatez para poder conservar ese equilibrio entre ser humano y naturaleza. Por lo anterior Jonas utiliza el siguiente imperativo: “Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica”, o expresándolo de modo negativo: “No pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra” (Siqueira, 2009).

Cuando se evalúa este tipo de responsabilidades de carácter ambiental, donde se analiza el hecho de la reparación por daño al hábitat, es necesario que pueda identificarse lo siguiente: los autores de la contaminación, que se pueda cuantificar el daño y que se establezca una relación entre el contaminador y los daños. Desde el campo de las ciencias jurídicas, pueden surgir diferentes clases de responsabilidades ante este supuesto como sería la responsabilidad civil por daño ambiental, la responsabilidad penal por daño ambiental y la responsabilidad administrativa por daño ambiental, el dilema jurídico es la aplicación consecuente de estas razones, que sería otro apartado de investigación posterior, por el momento es importante precisar que ya están definidas este tipo de responsabilidades y que antes de llegar a la aplicación de la fuerza estatal estaría bien conocer y tener una conducta más ética con el planeta. (Unidad de Medio Ambiente. Corte Suprema de Justicia, 2009).

La conciencia ambiental surgió en los años sesenta como parte del movimiento contracultural de búsqueda de nuevos sentidos existenciales y una resignificación de la vida y se convirtió en movimiento político en los años 70, luego de la Conferencia sobre Medio Ambiente Humano

(Estocolmo, 1972). Desde entonces se ha configurado la racionalidad de quien contamina paga y se ha venido acumulando una extensa normativa medioambiental que supone iniciar como punto de partida el principio precautorio basado en el cálculo del riesgo, además de los aportes de la ciencia en el debate político que hasta ahora desata un paradigma entre intereses económicos y sustentabilidad ambiental. (Leff, 2002).

Los conceptos anteriores de responsabilidad social y ambiental, depende de la posición que asuma cada empresa y el individuo, sin embargo, no son conceptos aislados, ni de realizar actividades mecanicistas, como instrumento para cumplir con una reglamentación que se exija en el momento y por ende proteger los intereses económicos, va más allá de esa visión, sino que se trata de una realidad humana. Este tipo de conceptos cambian el significado estricto de empresa lugar donde se desarrolla una actividad y se generan ingresos, para ir incorporando las acciones de responsabilidad social y ambiental, que integra la comunidad, proporciona trabajo, bienes y servicios y es más cautelosa a la hora de impactar el medio ambiente, buscando un modo distinto de entender la empresa y la responsabilidad que tiene con la sociedad.

Para seguir avanzando en este tema, se presentará la constitución política de Colombia de 1991 y las leyes que en materia de regulación tiene Colombia para proteger el medio ambiente y asignar las reglas de juego con respecto a la explotación de los recursos naturales.

2. Regulación nacional y departamental relacionada con la explotación de los recursos naturales en Antioquia

2.1 Los fines del estado

Artículo 2 de la constitución política de Colombia. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (Constitución Política de Colombia, 1991).

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Desde varios puntos de vista esta norma tiene implicaciones ambientales. En primer lugar, al facilitar la participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida económica, administrativa y cultural de la Nación. Las decisiones administrativas de contenido ambiental generan consecuencias jurídicas que repercuten en el vivir cotidiano de los ciudadanos. La consagración constitucional de un Estado social de derecho, puntualiza el carácter participativo de la Carta constitucional y el régimen democrático. La participación se vuelve un postulado concreto en decisiones que, como las ambientales, afectan las relaciones de los ciudadanos entre sí, frente a los recursos naturales y frente al sistema económico. Con

base al tipo de estado que se tenga, en este caso participativo, lo más normal que se presente es apropiarse de los medios de intervención para que la ciudadanía sea partícipe en una serie de decisiones que repercuten en su cotidianidad. Siguiendo este orden de ideas, las decisiones culturales también suponen un componente ecológico que merece destacarse.

En segundo lugar, cuando se habla de mantener la integridad territorial no sólo se hace referencia al mantenimiento o conservación de la integridad desde el punto de vista de la soberanía política (protección de agresores externos o internos que pretendan afectar esa integridad), sino que también puede interpretarse como el mantenimiento de la integridad física, corporal, de la Nación. Los recursos naturales, el patrimonio ecológico y físico de la Nación deben ser objeto de protección estatal porque se consagran como fines esenciales del Estado. Salvaguardar estos bienes es realizar por parte del estado todo lo que esté a su alcance para proteger el patrimonio ecológico y cultural, esta carga constitucionalmente se extiende a las personas, ya que no sólo constituye un deber por parte del estado garantizar un ambiente sano y una buena calidad de vida, sino un deber por parte de la ciudadanía que lo integra.

En tercer lugar, la mención de que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida a las personas residentes en Colombia, también permite reafirmar, como se dijo en el preámbulo, que la protección de la vida está en la esencia de la función protectora del medio ambiente.

Como se describe anteriormente la constitución es norma de normas y por consiguiente esta debe ser convocada cuando de modificaciones se trate, también vale aclarar que la interpretación de los apartados de la constitución, no se deberán desconocer en el momento de intervención de otros países, ya que como quedó consignado en los fines esenciales del estado, la protección de la vida, no sólo puede mirarse superficialmente en la especie humana, sino en los medios utilizados para que esa especie sobreviva, como lo es la conservación del medio ambiente. Para la constitución política de Colombia de 1991 también está contemplado planificar los recursos naturales con el fin de garantizar el desarrollo sostenible y para ello la responsabilidad no solo está concentrada en el ámbito nacional sino que se traslada a los entes territoriales; que buscarán normas necesarias para la protección del patrimonio ambiental. (Amaya, 1997).

2.2 Sustracción cronología de la legislación minera en Colombia:

1991 Art. 332 constitución política. (Constitución Política de Colombia, 1991).

Decreto 2119 restructuración organizacional del ministerio de minas y energía. Estado 1992. (Decreto 2119, 1992).

1993 ley 97 Reconocimiento propiedad privada. (Ley 97 , 1993).

Proyecto código Aramburo 1996.

Decreto 2152 Integración sector minero energético 1999. (Decreto N° 2152, 1999).

2001 ley 685 Minería modelo de enclave exportador. (Ley 685, 2001).

C-339 y C-891 Obligación consulta código bajo la constitución política 2002. (Corte Constitucional,

2002).

2003-2004 Decreto 520 y 254 Disolución Carbocol. (Decreto 520 , 2003).

T-769 Consulta previa para proyectos gran escala 2009. (Sentencia T-769 Comunidad indígena-Protección estatal, 2009).

2010 ley 1382 reforma ley 685. (Ley 1382, 2010).

Decreto 2820 licencias e impactos ambientales 2010. (Decreto 2820, 2010).

Ley 1450 de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. (Ley 1450, 2011).

Ley 1753 de 2015 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. (Ley 1753, 2015). La normatividad anterior regula, establece y hace modificaciones en relación a los organismos y entidades del estado, como también de los particulares entre sí, sobre las actividades de prospección, exploración, explotación, beneficio, transporte, aprovechamiento y comercialización de los recursos no renovables que se encuentren en el suelo o subsuelo de propiedad privada o de la nación. La finalidad de esta guía reglamentaria es administrar el sector minero, adoptando planes y programas que mejor le convengan al país y de esta forma apuntar a sus pilares estratégicos: Seguridad jurídica, condiciones competitivas, confianza legítima, infraestructura, información e institucionalidad minera fortalecida y eficiente. (Red por la justicia ambiental en Colombia, 2016).

Entidades adscritas para el óptimo desempeño de la actividad minera: Agencia Nacional de Minería (ANM) es la ejecutora de la política y la responsable de los procesos de titulación, registro, asistencia técnica, fomento, promoción y vigilancia de las obligaciones emanadas de los títulos y solicitudes de áreas mineras. Además, es la encargada de administrar el catastro minero y del registro minero nacional. (Agencia Nacional de Minería).

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) es la encargada de la planeación integral, indicativa y permanente del desarrollo sectorial y responsable de la producción y divulgación de la información requerida por los actores del sector para la toma de decisiones y la formulación de política. Además, determina los precios de referencia para la liquidación de regalías y, por delegación, administra el Sistema de Información Minero Colombiano (SIMCO). (Unidad de Planeación Minero Energético).

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), realiza la investigación científica del potencial de recursos del subsuelo del territorio nacional de acuerdo con las políticas del Ministerio de Minas y Energía. En ese sentido, el SGC actualiza el mapa geológico colombiano, caracteriza las zonas de mayor potencial de recursos del subsuelo, adelanta programas de reconocimiento, prospección y exploración del territorio nacional, compila, valida, almacena y suministra en forma automatizada y estandarizada los datos y la información del subsuelo y entrega información a la UPME para los estudios de planeación sobre su aprovechamiento. (Servicio Geológico Colombiano). (Energía, 2016)

Tal y como se evidencia anteriormente la legislación colombiana ha atravesado por varias modificaciones que invocan el bien común y la conformación de un unidades de apoyo, con base a su experiencia ha transformado esa búsqueda en la reglamentación del sector minero, pero ha suscitado otra serie de dificultades sociales, económicas, políticas y culturales, que son inherentes al tipo de

decisiones de cada gobierno, por lo que la visión no debe ser separada de lo que inicialmente identifica a un país y lo conmemora desde la lucha y el trabajo demandado en una carta de navegación llamada constitución política. (Duarte, 2012).

Con la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991 se creó el Fondo Nacional de Regalías y se determinaron los grandes sectores de inversión: promoción de la minería, preservación del medioambiente y proyectos regionales de inversión (art. 361 de la Constitución y Ley 141 de 1994 modificada por la Ley 756 de 2002). Esta modificación vino acompañada de la creación de un aparato institucional en materia de política minera.

En 1992 el expresidente de la República de Colombia César Gaviria Trujillo insistió en la necesidad de mejorar el clima de inversión en el sector minero. Para ello, países del llamado Norte Global como Canadá apoyaron la realización de reformas orientadas a liberalizar ese sector. En 1997 se firmó un convenio con el Canadian Energy Research Institut (CERI), que tenía por objeto fortalecer institucionalmente los ministerios del Medio Ambiente, Minas y Energía y sus entidades adscritas. “cuando un gobierno invierte en otro país lo hace porque pretende obtener de este algún beneficio o una ventaja competitiva”. (Fierro, Políticas Mineras en Colombia, 2012). Los intereses de un país a otro es una dinámica que se presenta desde la época del colonialismo y que hoy día se ha transformado como geopolítica, ya que los intereses de países dominantes siempre estarán a la orden de los países menos fuertes, dichos intereses son ayudas a cambio de contribuciones para el desarrollo de ese país que busca condiciones más allá de su territorio para perpetuar su poder y la prolongación de su población.

Como puede observarse según la cronología minera del país, desde 1992 al 2004 la orientación de la estructura minero energética del país se transformó de manera profunda sobre dos orientaciones: i) convertir las empresas estatales mineras y energéticas en organismos mixtos, integrando la participación de capitales privados en su funcionamiento; y ii) adaptar los aparatos estatales de gobierno minero a las exigencias de una minería de enclave exportador, en esta medida dichos aparatos pasaron de ser empresas líderes en el sector a estructuras de seguimiento y administración de la actuación de los actores mixtos y privados. De acuerdo con (Galeano, 2010). Se destacan dos Aspectos problemáticos en la Ley 1382 y la Ley 685: i) de un lado, la ausencia de una gobernanza ambiental minera, producto de la desarticulación de intereses, ambientales, sociales y económicos; y ii) de otra parte, la ausencia de participación civil en la toma de decisiones. Según los postulados anteriores, la máxima apertura de la entrada de capitales, la seguridad jurídica, las concesiones y el desplazamiento de la participación de la ciudadanía en los eventos que la comprometen directamente, son motivo de análisis para redefinir conceptos entre desarrollo y calidad de vida de los habitantes dentro de un territorio.

Posteriormente, en el año 2001 fue expedido el Código de Minas (Ley 685 de 2001) por medio del cual se le quitó la posibilidad al Estado colombiano de ser empresario en el sector minero o de crear empresas mineras de carácter público o mixto, restringiendo las ganancias económicas para el Estado colombiano únicamente a las regalías. Esta norma fue elaborada con el apoyo de consultoras canadienses tal como se sustenta en el informe de la Contraloría Delegada para el sector de Minas y Energía. Dentro de las normas emitidas a partir del año 2000, también se destacan los Planes Nacionales de Desarrollo Minero 2002-2006, 2007-2010 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

Visión 2019. Estos documentos proyectan a Colombia como un “país minero” pero no establecen una relación con la gestión de residuos contaminantes, las políticas agrarias o la protección de cuencas abastecedoras de agua. Si bien el sector minero contribuye al PIB de un país, esta misma estimación o cálculo por daños ocasionados por la actividad deberán contemplarse, ya que muchas de sus explotaciones se hacen a cielo abierto, y por lo tanto generan una carga negativa en materia ambiental. Este tipo de prácticas si han sido previstas jugarán un papel importante en la responsabilidad que implica entregar un medio ambiente en óptimas condiciones a la nueva generación del planeta. (Fierro, Políticas Mineras en Colombia, 2012). Con respecto a la visión del plan nacional de desarrollo para el año 2019, tiene como objetivos los siguientes: (minera, 2006).

1. Atraer un mayor número de clientes al mercado de acceso al recurso minero.
2. Lograr para el Estado una mayor captura de valor como consecuencia de los resultados exitosos de la actividad minera.
3. Optimizar los procesos de soporte que la inconstitucionalidad minera requiere para satisfacer las propuestas de valor que estructure para los diferentes segmentos de clientes.

Ahora las metas para el mismo año 2019:

- Duplicar el volumen actual de producción de carbón.
- Cuadruplicar la producción de metales preciosos.
- Convertir a Colombia en uno de los tres principales destinos latinoamericanos de la inversión privada, interna y externa, destinada a exploración minera.
- Incrementar la extensión del área contratada para exploración geológica – minera.
- Optimizar los procesos de contratación minera y de atención al cliente.
- Obtener un mayor conocimiento del subsuelo del país.
- Desarrollar agendas para productividad y competitividad en todos los distritos mineros.
- Incrementar la producción en desarrollos mineros comunitarios.
- Alcanzar un crecimiento del PIB minero por encima del promedio latinoamericano.

Así mismo, se han emitido reformas posteriores tales como la que se realizó al Código de Minas, por medio la Ley 1382 de 2010, que tenía como propósito atraer la inversión extranjera a este sector de la economía y flexibilizar el proceso de licenciamiento ambiental, que no es otra cosa que el área minera se reserve el derecho de un área potencialmente importante para desarrollar con el mejor proponente, que ofrezca condiciones técnicas, económicas, sociales y ambientales para el aprovechamiento del recurso. Este tipo de concesiones lleva a analizar la situación de Colombia con respecto a la retribución de la entrega de sus recursos naturales, si estarán en balanza de oportunidad y precio y si serán concordantes con otras experiencias en otros países. (Sierra, 2014).

2.3 Localización de explotaciones mineras en Antioquia

Según el Plan Operativo de la Dirección de Fiscalización del 2010, en el Plan de Desarrollo de Antioquia se determinó que el total de títulos a visitar eran 550, por lo cual el cubrimiento de este plan integral tuvo grandes logros y una implementación de la programación desarrollada con éxito, permitiendo así realizar al final del año 2010, 826 visitas técnicas, según la Secretaría de Minas en el año 2010. La Secretaria de Minas del Departamento y el Censo minero de Antioquia para el año 2010 dieron a conocer que existen 2.025 explotaciones mineras, aproximadamente: 381 son legales correspondientes al 19% y 1.644 son ilegales correspondientes al 81%, datos obtenidos de Contraloría General de Antioquia, 2011. Con respecto a la ilegalidad minera, Colombia está haciendo esfuerzos por pasar de un estado a otro, lo que sugiere mayor intervención en la comunidad, por vías de educación y vinculación hacia proyectos productivos en este sector.

Las subregiones con mayores problemáticas ambientales, sociales y de ilegalidad relacionadas con la minería, son: Bajo Cauca y Nordeste principalmente en los municipios de El Bagre, Nechí, Zaragoza, Tarazá, Amalfi, Anorí, Segovia y Remedios, datos proporcionados por la Contraloría General de Antioquia en el año 2011. (Villa, 2013).

La ilegalidad minera es un tema social por cuanto de ella se deriva el sustento diario de muchas familias, y por ende, es convertido en un problema del Estado. Además es un factor de poca productividad, de desaprovechamiento del recurso minero, del aumento de accidentalidad en las explotaciones y una pérdida departamental de recursos por la evasión en el pago de las regalías. (Villa, 2013).

A pesar de que Colombia está expuesta por estos años al boom minero, países como Chile y Noruega han demostrado que puede ser manejado exitosamente a través de una regla fiscal que permita ahorrar los recursos provenientes de la explotación de los recursos naturales, fueron capaces de mejorar el nivel tecnológico de sus industrias y establecieron los cimientos de una estructura económica más diversificada que dio origen a diferentes encadenamientos que potencian a su vez el crecimiento económico. Esta es la base de enseñanza para que Colombia y sus entes territoriales, referencien al vivir su propia historia unida al paso del impacto minero. (Revista Económica Supuestos Facultad de Economía, Universidad de los Andes Bogotá, 2010).

Entre 2004 y 2008 el aumento en área concesionada fue para el caso de Antioquia de un 280% cifra proporcional al aumento nacional para el mismo periodo, en el departamento se pasó de 170169 a 647857 hectáreas concesionadas. Ahora bien, Antioquia es un departamento altamente apetecido para la actividad extractiva, en este orden se relacionan las cifras que presenta el Centro de Atención a Víctimas, quienes reportan que en Colombia el número de víctimas por el conflicto armado asciende a 6 millones de seres humanos de los cuales, el mayor número se encuentra en Antioquia para el año 2014, cifras alarmantes de las cuales la mayor victimización es el desplazamiento forzado. A Colombia se le han presentado desafíos como tener suficiente capacidad y espacio para mantener una actitud vigilante que responda al cierre del ciclo de violencia y así poner en marcha los proyectos, que son vistos como las salidas, alternativas, garantías, para las víctimas del conflicto armado que lleva más de 50 años en su historia y que ahora estas personas buscan emprender una nueva vida en la legalidad, por lo tanto en los territorios de gran riqueza natural se sentirá la fuerza, aquella que impulsará al país a construir y buscar salidas que beneficien a la nueva ciudadanía. Este panorama refleja diversos interrogantes cómo por ejemplo ¿cómo actuará el estado para devolver los territorios a las víctimas del

conflicto, si estos ya están comprometidos en procesos de concesión con empresas dedicadas a la extracción de recursos naturales? El desenlace de esta pregunta podrá estar en camino o tardará años en concretarse, pero la realidad es apremiante cuando se trata de que un gobierno se fortalezca a nivel local y regional hasta el punto de influir en el contexto nacional, generando una dinámica de paz de abajo hacia arriba. (Insuasty, Grisales, & Gutiérrez, 2013).

Conclusiones

Según la indagación y los hallazgos realizados en este trabajo, en Antioquia se encuentra de forma muy incipiente o poco acogida la incorporación de la responsabilidad social y ambiental al interior de las organizaciones, por tal razón deberá trabajar en las implicaciones de la actividad minera, para que estas sean positivas y contribuyan a la sostenibilidad para el beneficio de la sociedad; el camino para hacerlo es armonizar las actividades de la planificación de los usos del suelo para alcanzar la meta de un ambiente sostenible.

Si Antioquia busca ser competitivo y generar valor agregado a la actividad extractiva, se deberá pensar en inversión en tecnología y en nuevos proyectos de encadenamiento, para no depender únicamente de la extracción a gran escala, sino de los demás negocios que se pueden desprender de dicha actividad.

Antioquia requiere de una actualización juiciosa de los usos, vocación, áreas protegidas títulos en concesión, y áreas de libre destinación, para realizar mejores proyectos en busca de la protección y competitividad del país. Esta actualización es como tener un radar que indique que es lo que pasa con el territorio, para poder intervenir oportunamente, en la vida práctica y administrativa del país, se llama Plan de Ordenamiento Territorial y en caso de tenerse es cumplir y hacer respetar dicha reglamentación.

Antioquia cuenta con el derecho a la participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia de 1991, así también está contemplado en el artículo 79 de la misma a gozar de un ambiente sano, por lo tanto las herramientas están dadas para hacer cumplir las voluntades de una comunidad siempre y cuando la acción sea consciente desde la población que habita estos territorios.

Antioquia deberá fortalecer las medidas de vigilancia y control de las autoridades minero ambiental, y el respaldo de la fuerza pública si es el caso, para proteger las áreas donde se evidencie el impacto negativo ambiental y el detrimento económico causado a la nación, ya que si el poco sentido de pertenencia no se vuelve en sentimiento y no hace parte de la cultura de un país, podrá ser violado en diferentes campos por otros países.

Bibliografía

- Agencia Nacional de Minería. (s.f.). Obtenido de www.anm.gov.co
- Amaya, O. (1997). La protección al medio ambiente en la Constitución Política de 1991. 131-135.
- Arias, A. (2010). De la responsabilidad social empresarial a la responsabilidad organizacional ambiental: aproximaciones a una ambientalización del pensamiento administrativo organizacional. *Gestión y Región* n° 9. enero-junio, 29-52.
- Ariza, E. (2012). El camino hacia la evolución de los informes de responsabilidad social en Colombia. *Rev.Fac.cienc.econ. Vol. XX (2) Diciembre*, 97-120.
- Bowen, H. (1953). *Social Responsibilities of the Businessman*. New York: Harper.
- Canessa, G., & Garcia, E. (2005). El ABC de la responsabilidad social y empresarial en el Perú y el mundo. *Depósito legal de la biblioteca nacional del Perú*, 13-92.
- Comunicación de Responsabilidad & Sustentabilidad Empresaria*. (2015). Obtenido de <http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/la-reveladora-historia-de-howard-bowen-el-padre-de-la-rse>
- Constitución Política de Colombia, De los principios fundamentales, Artículo 2 (1991).
- Constitución Política de Colombia, Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 332 (1991).
- Corte Constitucional, Derecho al ambiente sano- Construcción conjunta del Estado y de los ciudadanos y participación ciudadana (Derecho deber en tanto relación de lo público y lo privado/Participación ciudadana-Servidores públicos y particulares 2002).
- Decreto 2119 (Diario Oficial No. 40.704 31 de diciembre de 1992).
- Decreto 2820, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales (Diario Oficial N° 47.792 05 de agosto de 2010).
- Decreto 520, Ministerio de Minas y Energía (Diario Oficial N° 45.124 11 de marzo de 2003).
- Decreto N° 2152, Por el cual se modifica el Decreto 1141 (04 de noviembre de 1999).
- Duarte, C. (2012). Implementación y crisis actual sistema de gobernabilidad minera en Colombia: el modelo de enclave exportador. *Análisis Político. Análisis político N° 74*, 3-27.
- Duque, Y., Cardona, M., & Rendón, J. (2013). Responsabilidad Social Empresarial: Teorías, índices, estándares y certificaciones. *Cuadernos de Administración*, 196-206.
- Energía, M. d. (2016). *Bases para la minería del futuro. Política Minera de Colombia*. Bogotá.
- Fierro, J. (2012). *Políticas Mineras en Colombia*. Bogotá: Ilsa. p. 36.
- Fierro, J. (2012). *Políticas Mineras en Colombia*. Bogotá: Ilsa. p. 46.
- Galeano, J. (2010). Minería y Medio Ambiente en Colombia - la Nueva Regulación del 2010. *Portafolio*.
- Gómez, M., & Juan, L. (2012). Acerca de la sustentabilidad y la racionalidad ambiental: Un diálogo como fuente de cambio en la acción empresarial. *Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 82-94.
- <http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/la-reveladora-historia-de-howard-bowen-el-padre-de-la-rse>. (s.f.). Obtenido de <http://www.comunicarseweb.com.ar/biblioteca/la-reveladora-historia-de-howard-bowen-el-padre-de-la-rse>
- Insuasty, A., Grisales, D., & Gutiérrez, E. (2013). Conflictos asociados a la gran minería en Antioquia. 371-397.
- (2004). *Lecturas sobre derecho del medio ambiente*. Bogotá: Departamento de publicaciones Universidad Externado de Colombia.

- Leff, E. A. (2002). Más allá del desarrollo sostenible: la construcción de una racionalidad ambiental para la sustentabilidad: una visión desde América Latina. LEFF, E.; EZCURRA, E.; PISANTY, I., 479-578.
- Ley 1382, Por el cual se modifica la ley 685 DE 2001 Código de Minas (Diario Oficial 47618 09 de febrero de 2010).
- Ley 1450, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014 (Diario Oficial N° 48.102 16 de junio de 2011).
- Ley 1753, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” (Diario Oficial N° 49.538 09 de junio de 2015).
- Ley 685, Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones (15 de agosto de 2001).
- Ley 97 , Por la cual se interpreta con autoridad la Ley 20 de 1969 y se dictan otras disposiciones (DIARIO OFICIAL. CXXIX. N. 41143 20 de diciembre de 1993).
- Milán, N., Rosa, M., & Villaruel, M. (Septiembre de 2009). Responsabilidad social y medio ambiente, el rol del Estado. Uruguay.
- Minera, U. d. (2006). *Plan Nacional para el desarrollo minero, visión al año 2019*. Bogotá.
- Murillo, J., Garcés, C., & Torres, P. (2004). Estrategia empresarial y medio ambiente: Opinión de un grupo de expertos. *Universia Business Review*, 53-62.
- OECD.ORG. (s.f.). Recuperado el 22 de 11 de 2016, de BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES: <http://www.oecd.org/countries/colombia/colombia-debe-cuidar-el-medio-ambiente-para-asegurar-un-crecimiento-economico-sostenible-ocde.htm>
- Red por la justicia ambiental en Colombia*. (2016). Obtenido de <https://justiciaambientalcolombia.org/2016/04/28/resumen-politica-minera/>
- Revista Económica Supuestos Facultad de Economía, Universidad de los Andes Bogotá. (2010). *Revista Económica Supuestos Facultad de Economía, Universidad de los Andes Bogotá*, Edición 003.
- Saavedra, M., Arias, A., Arias, Á., Carlos, B., Montoya, J., Murillo, M., y otros. (2010). *Gestión y Región*, 177-181.
- Sentencia T-769 Comunidad indígena-Protección estatal, Expediente T-2315944 (2009).
- Servicio Geológico Colombiano*. (s.f.). Obtenido de www2.sgc.gov.co
- Sierra, X. (2014). Derecho, minería y (neo) colonialismo. Una aproximación crítica a la regulación de la minería de oro a gran escala en Colombia. *Opera N°14*, 161-191.
- Siqueira, J. (2009). El principio de responsabilidad de Hans Jonas. *Bioethikos*, 171-193.
- Unidad de Medio Ambiente. Corte Suprema de Justicia*. (2009). Obtenido de http://www.csj.gob.sv/AMBIENTE/boletin/2009/MAYO09/BOLETIN28_05_09.html
- Unidad de Planeación Minero Energético*. (s.f.). Obtenido de www1.upme.gov.co
- Vargas, E., & Carmen, G. (2003). Análisis crítico de la legislación minera colombiana: Competitividad, medio ambiente y desarrollo sostenible. *Gestión y Ambiente*, 161-180.
- Villa, V. (2013). Diagnóstico Minero y Económico del departamento de Antioquia. *Boletín Ciencias de la Tierra N° 33*, 125-134.